

INFORMATIVO DE RELATORÍA

Junio de 2023

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Tercera</div> <div>Subsección B</div> <div>C.P. Fredy Ibarra Martínez</div>	<div>Acción de Tutela</div> <div><a href="#">11001-03-15-000-2023-01252-00</a></div> <div>Sentencia del 29 de marzo de 2023</div>
<p>En acción de tutela contra providencia que rechazó solicitud de extensión de jurisprudencia porque no tuvo en cuenta el escrito de subsanación de dicha solicitud ni el recurso de reposición presentado contra el auto que la rechazó; la Sala declaró improcedente el mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad debido a que los memoriales fueron enviados a un buzón electrónico diferente al destinado para su recepción y que había sido debida y previamente informado a las partes.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Segunda</div> <div>Subsección A</div> <div>C.P. Gabriel Valbuena Hernández</div>	<div>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</div> <div><a href="#">17001233300020150019801 (3638-2018)</a></div> <div>Sentencia del 02 de marzo de 2023</div>
<p>La Subsección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda, considerando que el reconocimiento de la pensión gracia resulta compatible con la pensión de invalidez; si bien el legislador no se pronunció expresamente en cuanto al reconocimiento simultáneo de estas dos prestaciones, lo cierto es que no existe disposición constitucional o legal que impida el goce de la pensión de invalidez y de la pensión gracia de manera concomitante.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Segunda</b> Subsección B C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#"><u>250002342000201502616 01 (3814-2019)</u></a>  Sentencia del 13 de abril de 2023
La facultad discrecional para la declaratoria de insubsistencia de empleos de libre nombramiento y remoción es una causal autónoma de retiro del servicio de la Rama Judicial. Sin que, el deber, a cargo del servidor judicial que recibe condecoración “José Ignacio Márquez al Mérito Judicial” (al que se le otorga como reconocimiento comisión remunerada de estudios con duración máxima de un año), de suscribir convenio por el cual se obliga a prestar sus servicios a la Rama Judicial luego de finalizado el programa académico por el doble del tiempo utilizado, limite el ejercicio de la autoridad nominadora.	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Segunda</b> Subsección B C.P. Carmelo Perdomo Cuéter	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#"><u>250002342000201900378 01 (3019-2021)</u></a>  Sentencia del 02 de marzo de 2023
La Sala al decidir recurso de apelación revocó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda por la que se pretendía declarar la nulidad de acto administrativo por el cual se declaró la vacancia judicial del empleo ostentado por el demandante en la Fiscalía General de la Nación.  Al demandante se le concedió comisión de servicios para desempeñar cargo de libre nombramiento y remoción como Jefe de la Oficina Jurídica del Centro de Memoria Histórica y le fue negada una nueva comisión para desempeñar el empleo de director administrativo y financiero de ese ente estatal, no obstante, tomó posesión.  La subsección del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto enjuiciado en razón a que no se configuró la causal abandono del cargo, ya que, en el momento de su declaración no se había presentado la dejación del servicio, sino que continuó bajo la situación administrativa de comisión, sin que, la no aceptación del cambio de	

cargo por la administración, alterara la naturaleza del puesto ni afectada el plazo otorgado.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Tercera</div> <div>Subsección C</div> <div>C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas</div>	<div>Reparación Directa</div> <div><a href="#">13001-23-31-002-2007-00812-01</a></div> <div><a href="#">(55229)</a></div> <div>Sentencia del 14 de diciembre de 2022</div>
<p>La Sala al resolver recurso de apelación revocó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por daño derivado de procedimiento quirúrgico y deficiencias de diagnóstico en el post operatorio.</p> <p>La Corporación abordó que el Tribunal al determinar demostrada la falla del servicio médico, ante la inexistencia de un dictamen pericial, optó mediante un proceso inferencial (indicio contingente grave) que atendiendo que la parálisis de miembros inferiores del paciente se hubiera presentado horas después de su intervención quirúrgica (hecho indicador o indicante), conforme a las reglas de la experiencia científica, objetiva y estadística (destacando que el Tribunal no precisó cuales) la cirugía no debió desencadenar en la paraplejia del paciente (hecho indicado).</p> <p>La Subsección se apartó de ese procedimiento inferencial, porque esa clase de prueba exige, una secuencia lógica concatenada que no permite ni admite pasarse de un hecho indicador a un hecho indicado, sin develar las reglas a través de las cuales se hace ese tránsito.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Tercera</div> <div>Subsección A</div> <div>C.P. José Roberto Sáchica Méndez</div>	<div>Controversia Contractual</div> <div><a href="#">250002336000-2013-01822-02</a></div> <div><a href="#">(56364)</a></div> <div>Sentencia del 03 de marzo de 2023</div>
<p>La Subsección confirmó sentencia en la que se declaró la nulidad absoluta de contrato de concesión minera por presentar superposición del 100% con el área del Parque Nacional Natural Yaigoje, atendiendo que existía prohibición normativa previa de ejecutar actividades minerales en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Tercera</div> <div>Subsección C</div> <div>C.P. Nicolás Yepes Corrales</div>	<div>Reparación Directa</div> <div><a href="#">19001233100020100014201 (54933)</a></div> <div>Sentencia del 12 de diciembre de 2022</div>
<p>La subsección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda por vulneración de la garantía constitucional a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos – <i>non bis in ídem</i>–; en razón a que, el señor Nerardo Cachago Sánchez (indígena) fue condenado por la justicia ordinaria como autor material del delito de homicidio simple, pese a que el cabildo indígena había proferido resolución sancionando al agresor a la pena de destierro.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Cuarta</div> <div>C.P. Milton Chaves García</div>	<div>Nulidad</div> <div><a href="#">11001-03-27-000-2020-00015-00 (25332)</a></div> <div>Sentencia del 25 de mayo de 2023</div>
<p>La Sección anuló la palabra no de las expresiones “Dentro de los términos para decidir de fondo <u>no</u> se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo <u>no</u> se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.</p> <p>Determinó la Corporación que los apartes demandados desconocen la garantía de publicidad para el administrado, que prevé el artículo 4 de la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013) y que impone a la administración la obligación de dar a conocer al interesado, el contenido total del acto administrativo, para que le sea oponible.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Cuarta</b> C.P. Wilson Ramos Girón	<b>Nulidad</b>  <a href="#">76001-23-33-000-2015-00617-01</a> <a href="#">(27121)</a>  Sentencia del 01 de junio de 2023
<p>La Sección confirmó sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló algunos artículos de Ordenanza por la cual la Asamblea del Valle del Cauca estableció un régimen sancionatorio del impuesto al consumo de licores en el departamento.</p> <p>Señaló la Sala, que la asamblea excedió el ejercicio de su competencia, dado que no estaba legitimada para crear sanciones, sino que por expresa disposición del artículo 59 de la ley 788 de 2022, las entidades territoriales están sujetas al régimen sancionatorio previsto en el Estatuto Tributario Nacional.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo	Sentencia C-192 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 018</a>
<p>La Corporación declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 166, 170, 179, 188-B de la ley 599 de 2000 (Código Penal) que establecen agravantes penales con efectos diferenciados para los parientes adoptivos o civiles; en el entendido que la protección penal también comprende a los parientes civiles en el mismo grado en el que se protege a los consanguíneos.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo	Sentencia SU-196 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 018</a>
<p>La Corte revocó protegió los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, al trabajo y la alimentación y al tratamiento diferenciado como etnia afrodescendiente de comunidades negras del río Anchicayá por falta de certeza sobre las condiciones actuales de funcionamiento del embalse y de represa, su vida útil, y sobre la posibilidad de que las comunidades pudieran encontrarse en presencia de un peligro grave e irreversible. Así, la corporación ordenó la adopción de las medidas urgentes para superar vacíos de información sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental; así como realizar un análisis integral de la estabilidad de la presa, su estado de colmatación y vida útil del embalse.</p>	



Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia C-197 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 018</a>
<p>La Corte declaró inconstitucional la exigencia de 1300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez en el régimen de prima media contenida en un apartado del artículo 9º de la ley 797 de 2003.</p> <p>Para el Alto Tribunal, la norma demandada exige, para que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez, acreditar las mismas semanas de cotización que los hombres, sin considerar las barreras y dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse en el mercado laboral y asumir las obligaciones del cuidado del hogar, así como las que se intensifican cuando llegan a la adultez mayor. Resultando inconstitucional la norma demandada por cuanto genera una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Jorge Enrique Ibáñez	Sentencia C-208 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 019</a>
<p>La Corte declaró constitucional el termino para el pago de condenas judiciales de pensiones en contra de una entidad pública contenido en el inciso segundo del artículo 192 de la ley 1437 de 2011.</p> <p>La demanda estimaba que la disposición acusada desconocía los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional cuando se aplica a condenas impuestas a entidades públicas para el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes.</p> <p>Para la Corporación, si bien la disposición demandada genera una afectación prima facie a los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la protección especial que se predica de los niños, niñas y adolescentes, de las personas de la tercera edad y de las personas en condición de discapacidad cuando se da aplicación a la norma; estimó que se trata de una medida razonable y proporcionada, en cuanto persigue un fin que no está constitucionalmente prohibido y que es importante: el cumplimiento del principio constitucional de legalidad del gasto, y los principios de planeación y anualidad presupuestal.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia SU-213 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 019</a>
La Corte amparó el derecho a la pensión de sobrevivientes de viudas a quienes se les suspendió por contraer nupcias o iniciar vida marital, con fundamento en normas expedidas en vigencia de la Constitución de 1886. Las reclamantes presentaron acciones de tutela en las que alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social en pensiones, a la vida en condiciones dignas, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital y al debido proceso, debido a la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones preconstitucionales señaladas y a los fallos de tutela en los que la Corte había amparado derechos en iguales condiciones.	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera	Sentencia SU-214 de 2023 <a href="#">Comunicado No. 019</a>
La Corte declaró que la sala de casación penal de la corte suprema de justicia incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la constitución al resolver negativamente solicitud de declaración de prescripción de la acción penal de la accionante, pese a que ya había transcurrido el término de cinco años, que se encuentra establecido en el artículo 189 de la ley 906 de 2004, sin que se hubiere dictado la sentencia de casación.	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Tercera de Revisión M.P. Diana Fajardo Rivera	<a href="#">Sentencia T-135 del 04 de mayo de 2023</a>
La Sala amparó como mecanismo transitorio los derechos, a la salud, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de una auxiliar de enfermería, quien fue desvinculada unilateralmente, al presentar quebrantos de salud, por la asociación sindical a la que pertenecía en Tuluá, Valle del Cauca.	
La Corporación consideró que la asociación sindical vulneró los derechos de la accionante al dar por terminado el contrato sin valorar su enfermedad mental ni solicitar previamente la autorización al Ministerio de Trabajo, estando claro el padecimiento de trastornos mentales que afectaban su desempeño laboral al encontrarse incapacitada en los días previos al despido y al tratarse de una situación que era de total conocimiento de la entidad contratante.	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Segunda de Revisión M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	<a href="#">Sentencia T-184 del 29 de mayo de 2023</a>
<p>La Sala concluyó, que la Contraloría Delegada Intersectorial 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República vulneró los derechos al debido proceso y de defensa de la sociedad fiduciaria BBVA Asset Management S.A. en el momento en el que le negaron el acceso a varias piezas procesales que daban cuenta de unas medidas cautelares practicadas en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra.</p> <p>La Sala previno a la entidad accionada que conforme al artículo 20 de la ley 610 de 2000 se abstenga, en futuras ocasiones, de negar o limitar a los sujetos procesales el acceso al expediente del proceso de responsabilidad fiscal, y en particular las piezas relativas a las medidas cautelares decretadas y practicadas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Segunda de Revisión M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	<a href="#">Sentencia T-150 del 10 de mayo de 2023</a>
<p>La Corte ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que admitiera un recurso de reposición que presentó un policía condenado por secuestro privado de la libertad, quien está pidiendo que su expediente sea conocido por la justicia transicional.</p> <p>La Sala consideró que el accionante no puede presentar recursos y, en general, ejercer ninguna actividad con las autoridades judiciales, sin la intermediación de las autoridades penitenciarias. Por ello, concluyó que la Sala de Definiciones de la JEP incurrió en un defecto fáctico al asumir que el accionante pudo acceder a las autoridades penitenciarias para presentar un recurso de apelación antes de que se cumpliera el plazo que por ley se estima.</p> <p>La Corporación amparó los derechos del policía, y además, le ordenó al INPEC adoptar las medidas necesarias para que, al momento de llevarse a cabo la gestión de documentos para envío externo de los reclusos, en todos los establecimientos bajo su cargo, se deje constancia en el cuerpo del documento recibido, así como en una minuta o aplicativo, de la fecha en que el interno presentó su petición, recurso u otros y de los días en los cuales en el respectivo centro penitenciario se reciben documentos.</p>	



Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Octava de Revisión M.P. Cristina Pardo Schlesinger	<a href="#">Sentencia T-141 del 05 de mayo de 2023</a>
<p>La Corte amparó los derechos al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social y la vida digna de una mujer de 26 años, quien fue despedida en estado de embarazo. Así mismo, explicó que el auge tecnológico e informático de programas de mensajería instantánea como WhatsApp, cobra relevancia respecto de las pruebas que por ese medio puedan existir.</p> <p>La empleada dejó de presentarse a su trabajo, escribiéndole vía WhatsApp a una trabajadora de recursos humanos que le otorgaron incapacidad durante dos días por estar embarazada adjuntando imagen del diagnóstico médico. Al culminar los días de reposo, la trabajadora recibió carta de despido justificado en un recorte de personal. La empresa se justificó en el trámite de tutela en que no tenía desconocimiento del estado de gravidez de la empleada y que su desvinculación obedecía a un recorte de personal.</p> <p>La Sala indicó que el empleador sí tenía conocimiento previo del estado de gravidez de la accionante, ordenando el reconocimiento de licencia de maternidad, pagarle los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación y reconocerle una indemnización de 60 días de trabajo. Además, hizo un análisis respecto de las pruebas que estaban documentadas en el proceso, entre ellas, los pantallazos de WhatsApp mencionando que deben valorarse según la fuerza de convicción otorgada a los documentos según la ley 1564 de 2012.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Segunda de Revisión M.P. Juan Carlos Cortés González	<a href="#">Sentencia T-101 del 13 de abril de 2023</a>
<p>La Corte amparó el derecho fundamental a la salud, en su faceta de diagnóstico, a una mujer que sufre de flacidez cutánea, como consecuencia de algunos tratamientos médicos a los que se sometió, debido a que padecía de obesidad mórbida. La mujer contaba con diagnóstico de profesional de la salud no adscrito a la EPS según el cual, aquella debía someterse a una reducción mamaria, no obstante, la secretaría de salud del Cesar y Nueva EPS negaron el servicio porque consideraron que las cirugías solicitadas son de carácter estético y no están incluidas en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).</p>	

La Sala encontró que la EPS no realizó un diagnóstico médico que contuviera las razones para negar los servicios solicitados, ni existieran argumentos médicos que concluyeran que los servicios solicitados tenían una finalidad estrictamente estética.

Atendiendo que la Corporación no encontró concepto médico que precisara que los servicios médicos solicitados fueran de carácter reconstructivo o funcional, ordenó a la EPS a realizar un examen médico integral que determinara la procedencia de los procedimientos quirúrgicos que la demandante requería con base en su estado clínico.

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. José Fernando Reyes Cuartas	<a href="#">Sentencia T-188 del 30 de mayo de 2023</a>
<p>La Corte amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la vida digna y el debido proceso de una mujer a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó continuar con el pago de la cuota alimentaria que percibía de la asignación mensual de retiro de su ex cónyuge bajo el argumento de que la obligación de alimentos dejó de existir al momento del fallecimiento de la ex pareja de la accionante.</p> <p>La Sala determinó que la obligación de dar alimentos (25% de la asignación de retiro devengada) no se extinguió con la muerte del ex cónyuge porque las circunstancias de necesidad económica de la accionante permanecían en el tiempo. Además, indicó, que continuar el pago de los alimentos a la ex cónyuge no constituía una vulneración de los derechos de la titular de la prestación de sobrevivencia (la nueva compañera permanente), porque la obligación alimentaria se originó con anterioridad al reconocimiento de la prestación.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. José Fernando Reyes Cuartas	<a href="#">Sentencia T-092 del 30 de marzo de 2023</a>
<p>La Corte amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de una mujer, ordenando a la UGPP el reconocimiento de la respectiva sustitución pensional en la proporción que le corresponda en calidad de hija beneficiaria de su padre fallecido.</p> <p>La entidad había negado la prestación, en una primera oportunidad porque no era la encargada de realizar ese trámite, obteniéndose a través de la EPS dictamen de calificación con una paridad de capacidad laboral con un 53%. Y luego, por no</p>	

acreditarse la calidad de curadora o tutora de la accionante respecto de la agenciada (hija con pérdida de capacidad laboral).

Para la Sala, la entidad impuso una barrera administrativa que generó una dilación injustificada en el trámite, desconoció la especial protección que se les debe garantizar a las personas en situación de discapacidad, se apartó de la jurisprudencia constitucional, y actuó en contra de una prohibición que la ley impone expresamente porque no se puede dejar sin protección a una persona en situación de discapacidad a pesar de que no se hayan convertido las interdicciones en medidas de acompañamiento o apoyo.

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> Sala Quinta de Revisión M.P. Alejandro Linares Cantillo	<a href="#">Sentencia T-177 del 26 de mayo de 2023</a>
<p>La Sala amparó el derecho a la seguridad social invocado por una mujer (calificada con una pérdida de capacidad laboral del 65%, estructurada antes del inicio de su relación laboral), a quien Protección S.A. le negó la pensión por invalidez por no acreditar la cotización de 50 semanas tres años previos a la estructuración de la enfermedad.</p> <p>La Corporación adujo, que, si bien la enfermedad de la mujer se empezó a presentar desde 2011, ella con sus patologías siguió laborando con la capacidad laboral residual de la que aún gozaba y alcanzó a cotizar 230 semanas de pensión entre octubre 2015 y marzo de 2020, hasta cuando la EPS la calificó con un porcentaje mayor y no pudo continuar con sus labores.</p> <p>Indicó la Corte que, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral consignada en los dictámenes de calificación no es el único criterio a tener en cuenta en personas afectadas por enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas, pues en su caso pueden desarrollar una capacidad laboral residual en virtud de la cual son capaces de trabajar y cotizar al sistema luego de ella. Y que, en el presente caso, si se toma como fecha la calificación de la enfermedad en marzo de 2020, y no diciembre de 2011, la accionante sí cumple con el requisito de acreditar las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha en la que se consolida la discapacidad.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<p data-bbox="232 379 823 432"><b>Corte Suprema de Justicia</b></p> <p data-bbox="261 446 794 532">Sala de Casación Penal M.P. José Francisco Acuña Vizcaya</p>	<p data-bbox="1003 311 1349 397">STP2845-2023 Radicación No. 128932</p> <p data-bbox="922 451 1430 639">Fallo de tutela del 21 de marzo de 2023 <a href="#">Boletín Jurisprudencial junio de 2023</a></p>
<p data-bbox="175 696 1446 951">La Sala modificó fallo impugnado concediendo el amparo del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de empleada judicial que solicitaba dejar sin efectos acuerdo expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en el que se dispuso ordenar que el cargo por ella ostentado prestara apoyo de manera transitoria a otro juzgado.</p> <p data-bbox="175 1018 1446 1220">La Corte modificó el amparo en el sentido de conceder el amparo de manera transitoria dejando sin efectos el acuerdo objeto reproche de manera provisional, mientras la accionante interpone el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho.</p> <p data-bbox="175 1287 1446 1435">Consideró la Corporación, que el amparo no podía serlo de forma definitiva porque sería invadir la órbita de autonomía e independencia de la administración de justicia de los jueces ordinarios, o de lo que puede ser reclamado por vía administrativa.</p>	